

El PFAC rechaza sin paliativos la nueva regulación de la Unión Europea que promueve la deportación de inmigrantes a terceros países, incluyendo menores, contraria a los más elementales DDHH

3 de junio

En pleno proceso de regularización de la población extranjera que vive y trabaja en España y la campaña ultraderechista que propugna su absoluta desprotección y vulnerabilidad ante todo tipo de abusos y explotación, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea añaden un nuevo giro a la derecha en la política nacional y europea.

La nueva regulación del pasado 25 de mayo, acordada por los partidos de extrema derecha, conservadores y populares europeos permite a los gobiernos integrantes de la Unión Europea llegar a pactos con terceros países para expulsar a personas que hayan llegado a Europa de manera irregular y será de obligada aplicación en los 27 países de la UE, porque no es solo una recomendación a los Estados como si se tratara de una directiva.

Siguiendo el modelo iniciado por Meloni en 2024, con la creación de centros de detención en Albania gestionados por Italia, los estados de la UE podrán crear centros en terceros países para deportar a personas migrantes que hayan recibido una orden de expulsión, y permitirá detenerlas durante más de dos años. En la versión final aprobada, se ha incluido su aplicación a menores sin acompañamiento y a familias.

Para el PFAC, esta directiva constituye un grave atentado a los DDHH de las personas migrantes y muy especialmente de menores y mujeres que, por múltiples razones burocráticas injustificables, no obtengan el permiso de residencia en la Unión Europea, mientras impera un modelo extractivista del capitalismo global que sigue expulsando a la población de sus países de origen en los que cada día es más difícil sobrevivir.

El cinismo expresado en esta regulación se añade a su durísimo contenido cuando establece que solo se podrá llegar a acuerdos con "terceros países que respeten los derechos humanos, el derecho internacional y el principio de no devolución".

Exigimos que el gobierno de España se desmarque radicalmente de las iniciativas en curso de países como Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia en esta dirección y también exigimos a todos los partidos políticos españoles con representación en la Eurocámara que denuncien y frenen por todos los medios esta infamia en la Unión Europea.